

Los paradigmas de la ‘nueva’ ruralidad a debate: El proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador

Víctor Bretón Solo de Zaldívar

En los últimos años, al menos desde el inicio de la década de los noventa, una nueva moda se ha ido instalando en el mundo del desarrollo. Conceptos tales como *vida asociativa*, *sociedad civil* y *capital social* han ido ganando espacio, generalizándose la idea de que existe una relación directa entre la densidad organizativa del tejido social, la vitalidad de la democracia participativa y el nivel de vida alcanzado. Una sociedad civil articulada – se suele argumentar – puede apoderarse del timón de sus propios procesos de cambio (el célebre *empowerment* de la literatura al uso), garantiza la participación ciudadana en los asuntos públicos y posibilita, en el caso de los países del Sur, mantener programas de intervención sostenibles. En ese universo discursivo, el del capital social es un tema recurrente que ha desatado un intenso debate académico, convirtiéndose en objetivo predilecto de una parte importante de las agencias de cooperación y cristalizando en propuestas concretas que, en el ámbito específico de las áreas rurales, permiten retomar la polémica a la luz de nuevos argumentos empíricos. El objeto de este trabajo es examinar la trayectoria del *Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador* (PRODEPINE), una de las iniciativas que han hecho de esa noción el icono distintivo de su quehacer institucional. La intención es tantear no tanto las virtudes y los límites analíticos del concepto de capital social como el modo en que organismos de la envergadura del Banco Mundial lo han interpretado y proyectado en forma de modelo de actuación. El análisis de los resultados de esta experiencia en los Andes del Ecuador permitirá volver, ya en el segmento final del ensayo, sobre los paradigmas actuales del desarrollo rural y sus implicaciones.¹

Por tratarse de un proyecto dirigido a población étnicamente diferenciada, PRODEPINE nos sitúa frente a la cuestión general de la indianidad en América Latina. El campesinado, que en determinados contextos – básicamente en los Andes y Mesoamérica – tiene un marcado carácter étnico, constituye allí una parte importante de la estructura social de muchas áreas rurales y es además un agente potencial de cambio social, tal como ha sido puesto de manifiesto en no pocos trabajos (Petras y Veltmeyer 2001, 111). Durante los años ochenta y noventa, en países emblemáticos como Ecuador y Bolivia, las plataformas organizativas indígenas se han constituido como las instancias más importantes de contestación social y de interlocución con los agentes externos, públicos o privados, nacionales o multilaterales. Ante su emergencia (y su eficacia), la respuesta del *establishment* neoliberal ha sido la de recoger sus demandas para, en cierto sentido, fagocitarlas e insertarlas en el campo de acción de la praxis (de lo posible, lo negociable, lo *viable*) en forma de un conjunto de propuestas que ubican aquellas reivindicaciones originales dentro de un escenario *políticamente correcto* y asumible desde la lógica del pensamiento

dominante. Ese proceso ha pasado por la publicitación de una serie de modelos de actuación sobre las sociedades indígenas – entre los que el ‘desarrollo con identidad’ (*etnodesarrollo*) y el capital social desempeñan un rol protagónico –; modelos que en el caso ecuatoriano – y a nivel experimental para el conjunto de la región – han convergido en la puesta en funcionamiento de PRODEPINE, cuyo diseño – y ahí reside una de sus principales peculiaridades – fue resultado de una compleja negociación entre las grandes plataformas étnicas nacionales, el Estado y el mismo Banco Mundial. En cierto sentido, pues, encaja dentro del esquema característico de las luchas indias de las últimas décadas: la conquista de espacios de representación – y de decisión – insertos, a pesar de todo, en escenarios macro que escapan a su control y que obedecen a dinámicas ajenas al mundo campesino.

En cualquier caso, al ser fruto en su forma final de un proceso de negociación, PRODEPINE es percibido desde las elites indígenas como un avance, una conquista. Otra cosa se constata al descender hacia los niveles básicos del edificio organizativo en el medio rural: allí, en las comunas, en las cooperativas, en las asociaciones de pequeños productores, la imagen que el común de los mortales destila de PRODEPINE es, simplemente, la de una agencia de intervención más de las muchas que han pasado implementando o apoyando proyectos de desarrollo. Lamentablemente, el análisis de ese juego de miradas escapa a los objetivos de este artículo, limitado a explorar los datos estadísticos generados por la maquinaria burocrático-administrativa del Proyecto a lo largo de casi cinco años de actuación. Constituye, pues, una primera aproximación generalista que ha privilegiado un análisis de carácter cuantitativo; no excluye – muy al contrario – su deseable continuación a partir del estudio de las voces polifónicas – y contradictorias – de sus copartícipes y destinatarios finales.

Capital social y desarrollo: del análisis a la praxis

Como categoría explicativa, el capital social ha irrumpido en una amplísima gama de fenómenos que va desde los problemas derivados de la acción colectiva hasta el desarrollo económico, pasando por la creación de capital humano o por el debate sobre el grado de efectividad de los poderes públicos. Se trata de un término difuso y difícil de definir, tal como lo atestigua la enorme dispersión de acepciones de que ha sido objeto; dispersión que, para algunos analistas, puede hacer del capital social una etiqueta maleable, imprecisa y poco útil como herramienta analítica (Fine 2002, 20).² Sea como fuere, el caso es que ha terminado convirtiéndose en uno de los ‘temas estrella’ en el diseño de modelos de actuación sobre el mundo rural, lo que ha llevado a proponer definiciones operativas susceptibles de plasmarse en políticas substantivas. Buen ejemplo lo constituye el esfuerzo desplegado por Carroll (2002 y 2003), quien sugiere entender el capital social, simplemente, como ‘la confianza, reciprocidad, normas y reglas de relación cívica en una sociedad, que facilitan la acción coordinada con el fin de lograr objetivos mutuamente deseados’. Su interés radica en que, por tratarse de un recurso asociativo ‘que puede acumular un grupo social como resultado de interacciones que favorecen la confianza, el respeto mutuo y la cooperación’, es capaz de aumentar ‘el efecto de otros tipos de capitales, al volver más efectivas las inversiones’. En este punto el autor distingue entre dos tipos de capital social, el puramente estructural – equivalente, sin más, a

la capacidad organizativa – y el cognitivo o alusivo a normas, valores y creencias (Carroll 2002, anexo A). El primero de ellos es el que centra la atención de las agencias de desarrollo, pues se le considera idóneo para ensanchar ‘la capacidad de la sociedad para actuar e influenciar en la naturaleza y conducta de los actores en las esferas del mercado y del Estado’ (Bebbington y Torres 2001, 78).

Hasta el momento, la *Social Capital Initiative* (SCI) es el programa del Banco Mundial que mejor encarna la importancia otorgada por esa institución al capital social como guía de las políticas de desarrollo. Su objetivo era analizar tanto las potencialidades del concepto como definir metodologías capaces de cuantificar su densidad y medir su impacto sobre el bienestar colectivo. Con este fin, se puso en marcha una ambiciosa agenda de investigación – operativa de 1998 a 2001 – que ha servido para reafirmar la tesis de que ese activo puede jugar un papel remarcable en las medidas orientadas a reducir la exclusión y la pobreza (Grootaert y Van Bastelaer 2001). Los estudios sugieren, concretamente, que su concentración facilita el éxito de las inversiones en desarrollo rural, ya que, entre otros factores, estimula el incremento de la productividad agrícola y favorece la gestión comunitaria de determinados recursos. Con todo, más allá de los resultados analíticos *en sí mismos* obtenidos desde la SCI, hay que tener presente que el manejo de ese término encaja en el espíritu del Post-Consenso de Washington: Ben Fine ha señalado repetidamente (2001 y 2001b) de qué manera es atractivo para el Banco Mundial porque, entre otras cosas, permite generalizar (ligando los diferentes aspectos de un entramado social concreto), incorporar – aunque no hablen explícitamente de capital social – contribuciones académicas precedentes (dándole al debate una profundidad histórica que en realidad no tiene), y poseer una escala de actuación microregional que dificulta la crítica de las intervenciones anteriores, aspecto éste remarcable en escenarios donde ya se habían ensayado ajustes estructurales de alto coste social.

Ante la dureza de las críticas recibidas, algunos autores han intentado matizar el sentido en que debe interpretarse la apuesta del Banco Mundial por el capital social. En un sugerente artículo al respecto, Bebbington, Guggenheim, Olson y Woolcock (2004) plantean que es necesario contemplar que gracias a ella se han abierto en el Banco importantes espacios de debate que están contribuyendo a renovar, lejos del reduccionismo estadístico, la idea misma de pobreza. Señalan, por otra parte, que estamos ante una institución mucho más plural y heterogénea de lo que suele creerse y que, para entender las interacciones que se dan entre los discursos, los nuevos paradigmas y las posibilidades de cambios en la praxis, hay que tener en cuenta los procesos a través de los cuales las tesis se discuten, se difunden e influyen en los lineamientos políticos definitivamente priorizados. Como es habitual en el mundo académico, al interior del Banco hay distintos paradigmas que se discuten simultáneamente, constituyendo éste en sí mismo un gran campo de batalla del conocimiento con diferentes arenas y contendientes: la noción de capital social emergió de ese magma – siempre de acuerdo a estos autores – como una herramienta capaz de vincular la polémica sobre la participación popular con la teoría del desarrollo.

Conviene insistir sin embargo en que una cosa es el debate científico en el seno del Banco Mundial y otra diferente el contenido práctico (político) que finalmente se le ha dado a ese concepto y que coincide, al menos en el mundo rural, con la

puesta en funcionamiento de unos lineamientos muy respetuosos con las políticas neoliberales. Hacen gala, para empezar, de una retórica postmoderna que, en nombre de la sostenibilidad, el empoderamiento y el etnodesarrollo, justifica actuar a través de la sociedad civil, preservando y manteniendo los prejuicios contra el Estado y las organizaciones de *viejo cuño*, tales como sindicatos o similares. En nombre del capital social, además, el Banco puede intervenir selectivamente y de un modo discrecional en aquellas áreas donde exista o se considere posible fomentar ese activo. Todo esto sirve, en buena parte, para distraer la atención de aspectos clave desde el punto de vista del poder político y económico, al tiempo que da coherencia retórica a la demanda, recurrente desde el Post-Consenso de Washington, de un ajuste *con rostro humano*.

Obsérvese si no cómo, para los países andinos, se ha tomado axiomáticamente a las federaciones de organizaciones de base – conocidas como organizaciones de segundo grado (OSG) – como los referentes primordiales de las intervenciones sobre el medio indígena-campesino. Por encima de las comunidades, las cooperativas o los diferentes grupos corporativos constituidos alrededor de determinados intereses (como juntas de riego o agrupaciones de productores), se concibe a las OSG como las instancias de representación que mejor actúan como caja de resonancia de las necesidades y expectativas de sus bases. En uno de los *working papers* elaborados para la SCI a partir de estudios de caso ubicados en Ecuador, Perú y Bolivia, Bebbington y Carroll (2000) argumentan prolijamente cómo este tipo de asociaciones articula un nivel supra-comunal de organización en torno a un conjunto de objetivos económicos, políticos y culturales compartidos, posibilitando la participación individual y proyectándola, al tiempo, hacia la esfera microregional. Sociológicamente, las OSG tienen la capacidad de combinar fuertes lazos intragrupal con redes de trabajo externas, generando lo que se ha calificado como un ‘ciclo dinámico positivo’ (Woolcock 1998): canalizan la acción colectiva hacia la intermediación ‘con actores e instituciones que regulan tanto la creación de otros tipos de capital, como las reglas que gobiernan el acceso a esos capitales’ (Bebbington y Torres 2001, 76-77). Desde este punto de vista, parece que la consolidación de OSG eficientes y representativas permite articular ‘islas de sostenibilidad’ en el medio rural andino, un medio dominado por ‘mares de desarrollo no sostenible’ (Bebbington 2003). De ahí la conveniencia de su apoyo.

El Proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador

PRODEPINE nació con la voluntad de transferir recursos y dar autonomía a las OSG como protagonistas de su propio desarrollo.³ Se trata del primer gran experimento de estas características a escala continental, razón que nos obliga a interrogarnos sobre el porqué de la elección del Ecuador como escenario privilegiado. Un elemento a considerar es que, con sus especificidades, éste es un país muy representativo – geográfica, histórica, social y económicamente representativo – de la realidad del mundo andino. Cuenta, por otra parte, con uno de los movimientos indígenas más organizados de la región: articulado mayoritariamente alrededor de la *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador* (CONAIE), se consolidó durante los años ochenta y se ha caracterizado hasta la fecha por una alta capacidad de movilización, por una notable destreza negociadora y por la presencia

de un discurso de fuerte contenido étnico; elementos coincidentes a grandes rasgos con los demás movimientos indianistas latinoamericanos. En el caso ecuatoriano, además, y ante el descalabro del Estado desarrollista de los años del *boom* petrolero, la CONAIE ha sido la instancia que más ha podido aglutinar a sectores amplios de la población contra las medidas excluyentes de corte neoliberal.

Naturaleza y líneas de actuación de la primera fase

Con una primera fase ya concluida (1998-2003) y otra segunda en ciernes, PRODEPINE se ha convertido en una de las tentativas más ambiciosas de desarrollo rural en Ecuador.⁴ Su novedad estriba en la orientación descentralizadora (plasmada en la apertura de siete oficinas regionales, amén de la sede central en Quito) y autogestionaria de su quehacer, limitándose a financiar y asesorar a las OSG para que controlen y supervisen las actuaciones sobre el territorio. Por medio de la elaboración de un autodiagnóstico previo, se perseguía que esas federaciones priorizaran sus necesidades, establecieran líneas de acción (perfiles) y contrataran al personal técnico necesario. A partir de ahí, la idea era poner a su alcance los recursos necesarios para asumir las acciones requeridas por unos planes de desarrollo local – 210 en total, habitualmente de ámbito parroquial – emanados a su vez de los diagnósticos participativos preliminares (Larreamey y Uquillas 2001). La justificación de un diseño programático como éste – exclusivo para la población indígena y afro del país – descansa sobre la recurrencia del binomio exclusión / pobreza característico de estos colectivos, a pesar de los logros conquistados a raíz de la emergencia de la CONAIE.

Para cumplir con tan vastos propósitos, el Proyecto fue diseñado con cuatro grandes componentes. El primero, calificado como de ‘fortalecimiento a las nacionalidades, pueblos y organizaciones’, tenía como meta apoyar a las OSG en planificación participativa, formación de equipos técnicos propios, recuperación del patrimonio cultural e incorporación del enfoque de género. El segundo era el de tierras y aguas, y estaba orientado hacia todo lo relacionado con la ‘titulación y legalización de los derechos de tenencia de la tierra en áreas productivas, forestales y de posición ancestral’. El tercer rubro era el de inversiones rurales, y se tradujo en la financiación de pequeños subproyectos ‘solicitados, preparados, implementados, [cofinanciados] y administrados por las comunidades, a través de las organizaciones de segundo grado’. Por último, PRODEPINE contribuyó a apuntalar al mismísimo *Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador* (CODENPE) a través de la capacitación de personal o la adquisición de bienes y equipos, entre otras actuaciones (PRODEPINE 2002, 3).⁵

Por varias razones, en este trabajo hemos priorizado el estudio del componente de inversiones rurales (los subproyectos). Es el que más se asemeja, en primer lugar, a lo que históricamente han venido haciendo las ONG en el área rural y, por ello, permite establecer comparaciones a fin de averiguar hasta qué punto PRODEPINE marca continuidades o cambios remarcables con respecto, al menos, a los últimos veinte años de presencia de agencias privadas de desarrollo. En segundo lugar, porque con sus doce millones de dólares constituye el capítulo más caro del Proyecto, el más susceptible de ser manejado desde las OSG y, por ello, el principal elemento inductor de su fortalecimiento: ahí queda su impacto sobre unas

bases sociales pauperizadas que, justamente por ello, ven a PRODEPINE más como un benefactor que como una posible hipoteca capaz de limitar en algún sentido el margen de maniobra de sus organizaciones.

El proyectismo de PRODEPINE a examen

Una primera radiografía general de PRODEPINE nos la brinda el *Informe de Cierre* editado en el verano de 2002. Tal como muestra la tabla 1, el Proyecto ha beneficiado en esta etapa, según sus propios recuentos, a un 24,9 por ciento de la población indígena del país y a un 32,8 por ciento de sus organizaciones de base. Unos y otros – individuos, familias y organizaciones – accedieron al mismo por medio de la intermediación de 152 entidades ejecutoras, la mayoría OSG. Es interesante también que, de los 16.609.580 dólares a que asciende el costo de los subproyectos, el 72,4 por ciento haya sido aportado directamente por PRODEPINE, quedando el 27,6 por ciento restante bajo la responsabilidad de las comunidades receptoras. El sentido último de esta política de cofinanciación es el de implicar, responsabilizar y hacer sentir como propias las obras a la población favorecida y a sus plataformas de representación. En muchos casos, dadas las características sociales y económicas de las áreas de intervención, las aportaciones comunitarias se realizaron en forma de prestaciones de trabajo.

Más allá de la información sobre los subproyectos, la tabla 1 merece algunas consideraciones colaterales. La primera tiene que ver con el énfasis que desde PRODEPINE se ha dado a la redefinición de las identidades étnicas en Ecuador. De hecho, es interesante observar cómo su puesta en funcionamiento ha coincidido con un aparente proceso de etnogénesis sin precedentes en el país; proceso plasmado en las adscripciones identitarias en *nacionalidades* y *pueblos* indígenas. Vemos así que junto a nacionalidades que podríamos calificar como *históricas* (achuar, awa, chachi, cofán, huaorani, tsáchila, quichua o secoya); aparecen otras de nuevo cuño (épera, huancavilca, manteña) y toda una pléyade de pueblos (andinos y amazónicos) que se diferencian entre sí a pesar de pertenecer a una gran nación quichua que funciona como referente macroétnico de elevados contingentes de población rural, sobre todo (aunque no sólo, como demuestran los quichuas de Napo, Orellana y Pastaza) en el área andina. La cuestión sería dilucidar, por un lado, hasta qué punto este *resurgimiento* de pueblos y nacionalidades es una elaboración de la intelectualidad y la dirigencia indígena; en qué medida responde a un sentimiento generalizado de las familias y organizaciones de base; y cómo se relaciona en algunos casos muy concretos – estoy pensando por ejemplo en manteños y huancavilcas – simple y llanamente con la llegada de PRODEPINE a la costa centro-sur *en busca* de clientes potenciales y con un manejo local del discurso etnicista extraordinariamente hábil y funcional de cara a obtener recursos en base a sus (supuestas) raíces indígenas (re)descubiertas.⁶

Un buen indicador del impacto de PRODEPINE sobre el andamiaje organizativo es comparar las cifras disponibles sobre OSG: las procedentes del censo levantado en sus primeros momentos (Coronel 1998); las contenidas en la revisión y actualización posteriores realizadas por la Fundación Heifer Ecuador (Larrea,

Tabla 1. Número total de organizaciones, población e inversión por nacionalidades y pueblos

Nacionalidad	Pueblo	Población		Beneficiarios			Inversión (USD)		Total
		Total	OB	Total	OB ¹	EE ²	PRO-DEPINE	Comunidad	
Achuar	Achuar	4.673	86	3.004	108	1	497.221	97.816	595.037
Afro	Afro	93.585	362	44.183	157	19	1.708.407	531.763	2.240.171
Awa	Awa	3.500	20	3.650	22	1	47.059	9.930	56.989
Chachi	Chachi	8.040	41	7.112	14	1	212.707	63.921	276.627
Cofán	Cofán	650	8	—	—	—	—	—	—
Epera	Epera	283	9	170	1	1	42.297	42.245	84.542
Huanca- vilca	Huanca- vilca	94.030	79	13.875	10	1	234.867	81.233	316.099
Huaorani	Huaorani	2.100	35	1.141	12	1	61.231	14.689	75.920
Kichwa	Chibuleo	45.702	107	10.500	8	3	153.207	100.637	253.844
	Kañari	142.498	357	19.720	143	12	682.696	250.468	933.164
	Karanki	19.161	73	3.028	14	3	205.178	72.888	278.066
	Kayampi	56.966	162	25.499	103	9	1.149.738	486.331	1.636.069
	Kitukara	58.915	77	440	1	1	64.500	22.800	87.300
	Napo	21.379	153	977	9	1	193.187	57.386	250.574
	Natawelas	3.832	17	—	—	—	—	—	—
	Orellana	17.400	81	4.325	76	1	97.470	134.013	231.483
	Otawalo	75.301	157	7.415	69	6	496.764	192.078	688.843
	Panzaleo	266.008	634	43.626	113	20	1.195.399	457.301	1.652.700
	Pastaza	12.033	63	83	1	1	20.450	5.979	26.429
	Pilahuines	15.160	23	6.185	21	2	81.602	25.598	107.199
	Puruwua	211.012	808	96.728	248	35	2.299.030	1.168.948	3.467.978
	Quisapinchas	8.759	18	7.265	6	1	78.168	31.846	110.015
	Salasakas	12.365	51	1.480	5	2	58.588	16.371	74.959
	Sarakuros	37.290	174	7.548	39	4	214.571	58.031	272.602
Sucumbios	16.210	57	595	8	2	96.419	33.534	129.953	
Tomabelas	24.822	35	12.578	15	2	165.555	55.925	221.480	
Waranka	59.382	180	22.417	62	13	536.655	169.871	706.526	
Total	Kichwa	1.104.195	3.227	270.409	941	118	7.789.178	3.340.007	11.129.184
Manteños	Manteños	75.487	240	—	—	—	—	—	—
Punahes	Punahes	2.242	7	—	—	—	—	—	—
Secoya	Secoya	350	5	—	—	—	—	—	—
Shiwiar	Shiwiar	686	13	750	12	1	78.347	18.500	96.846
Shuar	Shuar	46.974	596	14.118	273	6	1.179.564	341.251	1.520.814
Siona	Siona	350	5	—	—	—	—	—	—
Tsáchila	Tsáchila	1.338	8	1.035	5	1	120.931	33.513	154.444
Zápara	Zápara	595	7	260	4	1	53.380	9.526	62.906
Total	General	1.439.078	4.748	359.707	1.559	152	12.025.188	4.584.393	16.609.580

¹OB: Organizaciones de base o de primer grado.

²EE: Entidades ejecutoras de PRODEPINE.

Fuente: Elaboración a partir de PRODEPINE (2002, 20-21).

Cobo, García y Hernández 2002); y las de la propia base de datos de la oficina central de Quito sobre las entidades finalmente ejecutoras de intervenciones concretas. De la comparación de esas tres fuentes (tabla 2) salta a la vista, para empezar, el incremento de ese tipo de federaciones entre 1998 y 2002, período en el que se pasa de 141 censadas a 164 (+23). De esas 164, además, 107 están implicadas en subproyectos, lo que representa el 65,2 por ciento del total. Si tomamos como punto de referencia 1998, año del inicio operativo de PRODEPINE, el porcentaje aumenta al 75,8 por ciento. Este dato es importante, ya que muchas de las OSG

Tabla 2. Distribución de las OSG entre las provincias de la sierra

Provincia	OSG 1998		OSG 2002			OSG Ejecutoras 2003		
	Núm.	%	Núm.	%	Dif. 1998	Núm.	%	Dif. 2002
Azuay	11	7,8	7	4,3	-4	3	2,8	-4
Bolívar	9	6,4	14	8,5	5	10	9,3	-4
Cañar	20	14,2	18	11,0	-2	9	8,4	-9
Carchi	2	1,4	1	0,6	-1	2	1,9	1
Chimborazo	29	20,6	40	24,4	11	32	29,9	-8
Cotopaxi	19	13,4	23	14,0	4	14	13,1	-9
Imbabura	17	12,0	22	13,4	5	14	13,1	-8
Loja	6	4,3	5	3,1	-1	2	1,9	-3
Pichincha	12	8,5	15	9,1	3	7	6,5	-8
Tungurahua	16	11,4	19	11,6	3	14	13,1	-5
Total	141	100,0	164	100,0	23	107	100,0	-57

Fuente: Elaboración propia a partir de Coronel (1998), Larrea *et al.* (2002), y la información suministrada por PRODEPINE en soporte informático (julio-agosto de 2003).

ejecutoras *ya existían* (o estaban en proceso de constitución) en aquél momento, de donde se deduce, a título de hipótesis, que el Proyecto ha actuado como estímulo para la aparición de un número significativo de organizaciones a la expectativa de poder aprovechar la nueva coyuntura proyectista. Martínez Valle recuerda en un trabajo reciente de qué manera, en efecto, la población rural ha buscado con frecuencia agruparse alrededor de la figura de las OSG ‘como un mecanismo para obtener recursos económicos’. En el caso que nos ocupa, sin duda, éste ‘incremento organizacional está vinculado con la oferta de proyectos no sólo desde las ONG o de las instituciones tradicionales de desarrollo’, sino más bien ‘desde el principal proyecto indígena financiado con fondos del Banco Mundial’ (Martínez Valle 2003b, 6).

Si atendemos a la distribución provincial de las OSG, la tabla 2 indica cómo el orden de importancia de cada provincia en cuanto a su presencia en 2002 se mantiene escrupulosamente en lo que a entidades ejecutoras se refiere, con la única excepción de Bolívar, séptima en OSG operativas pero quinta en volumen de las que estaban comprometidas en la gestión de subproyectos. Tomando como referencia la columna de 1998 en relación a la de 2002, la cosa es bastante similar: sólo cambian Cañar (segunda en OSG en 1998 y quinta en 2002 – perdió dos organizaciones al tiempo que Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua aumentaron entre tres y once cada una), Azuay (que pasa del séptimo al octavo puesto tras perder cuatro federaciones) y Bolívar (que sube del octavo al séptimo con el incremento de 5 nuevas OSG). La cuestión relevante es que, allí donde se constata un mayor peso de PRODEPINE – traducido en la implicación en sus iniciativas de más entidades ejecutoras –, es donde más ha aumentado el número de OSG. Los casos emblemáticos de esta correlación los brindan las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua, evidencia que viene a corroborar las observaciones anteriores sobre el efecto inductor de PRODEPINE en la constitución de estas plataformas organizativas.

Conclusiones similares se derivan de la tabla 3, donde presentamos datos sobre población indígena, población rural con necesidades básicas insatisfechas, proyectos de desarrollo rural implementados por ONG y concentración de acciones PRODEPINE.⁷ Observamos, de entrada, que existe – además de una preeminencia

Tabla 3. Población rural (total, indígena y pobre), proyectos de desarrollo rural de ONG y plasmación de la primera fase de PRODEPINE en las provincias de la sierra

Provincia	Población Rural Censo 2001					ONG 1999		Ejecución PRODEPINE 1998-2002		
	población total	población indígena	% indígena	población pobre	% pobre	núm. proy.	% proy.	núm. org. ¹	núm. proy.	inversión total (\$)
Azuay	286.952	16.731	5,8	234.629	81,8	55	13,6	3	8	150.972
Bolívar	126.102	38.088	30,2	114.418	90,7	31	7,7	14	32	528.618
Cañar	131.380	31.285	23,8	111.305	84,7	24	5,9	10	33	457.766
Carchi	80.787	2.937	3,6	65.302	80,8	15	3,7	3	9	191.976
Chimborazo	245.852	145.729	59,3	227.910	92,7	119	29,4	37	120	2.185.846
Cotopaxi	255.965	81.187	31,7	231.573	90,5	23	5,7	16	45	940.297
Imbabura	171.830	75.296	43,8	141.080	82,1	34	8,4	14	44	1.138.513
Loja	221.522	11.086	5,0	204.179	92,2	64	15,8	2	9	113.911
Pichincha	674.502	47.418	7,0	414.067	61,4	24	5,9	8	40	881.147
Tungurahua	252.707	60.120	23,8	217.392	86,0	16	4,0	14	39	723.825
Total	2.447.599	509.877	20,8	1.961.855	80,2	405	100,0	121	379	7.312.871

¹ De las 121 entidades ejecutoras, 107 son OSG. El resto son organizaciones de tercer grado.

Fuente: Elaboración propia a partir de SIISE (2003), Fundación Alternativa (1999) y los datos en soporte informático proporcionados por PRODEPINE (julio-agosto de 2003).

clara de las OSG como contrapartes sobre cualquier otra forma asociativa (107 frente a 15) – una elevada correlación provincial entre el monto de recursos invertidos en subproyectos, el número de éstos, el volumen de entidades ejecutoras y, *mutatis mutandi*, la amplitud de los contingentes de población indígena, como era de esperar dada la orientación etnicista del Proyecto. Esto último es acusado en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura, las tres líderes en número total de OSG, de organizaciones ejecutoras y de subproyectos. Si descendemos al ámbito cantonal (ver anexo), estas relaciones se hacen aún más evidentes. En Chimborazo, por ejemplo, el cantón Riobamba acumula 49 subproyectos en 12 entidades ejecutoras (10 son OSG) mientras que Colta, con sus 13 organizaciones (11 OSG), es receptor de 41 de esas iniciativas. Baste con afirmar, en fin, que esa vinculación directa entre más organizaciones de segundo grado y más subproyectos es constatable en todos los cantones serranos.

En lo referente a la pobreza rural, sin embargo, la cosa cambia. El caso paradigmático es el de Chimborazo, provincia pionera en inversiones, subproyectos, organizaciones contraparte y presencia de ONG, pero cuarta en lo que respecta al monto de población clasificada como pobre en el Censo. Algo similar sucede en Imbabura, oscilante entre el segundo y el cuarto puesto en todos los rubros salvo en el de la pobreza, en el que ocupa el séptimo lugar. Pichincha, con relativamente pocas entidades ejecutoras, es la cuarta en inversiones y subproyectos, la quinta en población indígena y la primera en pobres en números absolutos, a pesar de lo cual las ONG que operan en su medio rural no han sido excesivamente generosas, dejándola en un modesto séptimo lugar. Más coherente parece la trayectoria de Carchi, la provincia con menos indígenas, menos pobreza rural, menos ONG y de las menos favorecidas por PRODEPINE. Azuay, por su parte, se lleva con Loja los peores resultados en el ‘reparto’ de los fondos del Proyecto y cuenta con pocas entidades ejecutoras, aún siendo la segunda provincia en la insatisfacción de necesidades básicas y la tercera (más acorde con esta última característica) en intervenciones de ONG.

Tabla 4. Clasificación de los subproyectos cofinanciados por PRODEPINE en la sierra

Tipo de proyecto	Categoría	Núm.	%	\$ inversión	%
Ambientales y manejo sustentable de recursos naturales	Forestación ambiental, viveros o jardines botánicos	8	2,1	166.770	2,3
	Protección de fuentes de agua	3	0,8	43.072	0,6
	Protección y/o manejo de cuencas	22	5,8	359.546	4,9
	Recuperación y/o conservación de suelos	12	3,2	212.606	2,9
	<i>Subtotal</i>	45	11,9	781.994	10,7
Capacitación y asistencia técnica	Capacitación para sistemas productivos	4	1,1	50.108	0,7
	<i>Subtotal</i>	4	1,1	50.108	0,7
Infraestructura productiva comunitaria	Abono orgánico o lombricultura	4	1,1	45.519	0,6
	Acuicultura	2	0,5	53.202	0,7
	Agroindustriales	29	7,7	526.593	7,2
	Animales menores	5	1,3	62.541	0,9
	Comercialización	5	1,3	122.433	1,7
	Cultivos de ciclo corto	3	0,8	9.265	0,1
	Cultivos permanentes	1	0,3	13.713	0,2
	Empedrado de caminos o puentes peatonales	16	4,2	325.185	4,4
	Establecimiento de pastos	8	2,1	120.901	1,7
	Forestación comercial / viveros	6	1,6	62.767	0,9
	Granjas integrales	7	1,8	134.568	1,8
	Invernaderos	32	8,4	398.095	5,4
	Mecanización agrícola	2	0,5	63.828	0,9
	Sistemas de riego	76	20,1	1.463.739	20,0
	<i>Subtotal</i>	196	51,7	3.402.349	46,5
Infraestructura social	Agua para consumo humano	59	15,6	1.668.981	22,8
	Alcantarillado o baterías sanitarias	4	1,1	136.418	1,9
	Aulas y / o comedores o albergues	30	7,9	573.902	7,8
	Centros de desarrollo comunitario	11	2,9	121.175	1,7
	Centros de desarrollo infantil	14	3,7	146.336	2,0
	Centros de salud	10	2,6	238.698	3,3
	Electricidad (energía solar)	5	1,3	181.490	2,5
	<i>Subtotal</i>	133	35,1	3.067.000	41,9
Patrimonio cultural	Desarrollo y / o conservación de patrimonio cultural	1	0,3	11.420	0,2
	<i>Subtotal</i>	1	0,3	11.420	0,2
Total		379	100,0	7.312.871	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PRODEPINE.

Bajando de nuevo a la escala cantonal (anexo), empero, se refleja más la enorme heterogeneidad de la realidad social andina. Es ahí donde descubrimos la tendencia de PRODEPINE, clara e inequívoca, a concentrar sus acciones justamente en aquellos escenarios más visitados previamente por las ONG. Así observamos cómo en Azuay son Cuenca y Gualaceo los dos cantones más agraciados por el componente de subproyectos, de igual manera que lo eran ya en cuanto a la preferencia por parte de las agencias privadas de desarrollo. Similar es la situación del cantón Guaranda en Bolívar: con sus 25 subproyectos y los más de 455.000 dólares transferidos a sus OSG, pareciera que, como en los casos anteriores, PRODEPINE hubiera tenido inclinación a converger prioritariamente sobre los espacios ya privilegiados por las ONG, pues éste es, con diferencia, el cantón de esa provincia en que más iniciativas implementaron aquéllas a finales de los noventa. Lo mismo sucede en Cañar con el cantón del mismo nombre; en Chimborazo con Colta, Riobamba, Guamote y Alausí; en Cotopaxi con Salcedo y Latacunga; en Imbabura con Otavalo y, en menor medida, con Ibarra y Cotacachi; en Loja con Saraguro; en Tungurahua con Ambato; y en Pichincha con Cayambe.

En otro orden de cosas, la tabla 4 ofrece una buena panorámica sobre la naturaleza temática de los subproyectos PRODEPINE. Las actuaciones en ‘infraestructura comunitaria’ – intervenciones en materia estrictamente productiva y de comercialización, amén de inversiones en mejora de caminos y puentes – constituyen la parte del león, con un 51,7 por ciento del total de las operaciones concretas y un 46,5 por ciento de las aportaciones financieras. De entre éstas, destacan los sistemas de riego, rubro que concentra en torno al 20 por ciento de los esfuerzos, tanto en subproyectos como en recursos. Estos datos revelan el peso otorgado a las actividades tributarias de una acepción agrarista del desarrollo rural, tal como ha sido común en los últimos decenios: el mejoramiento de los niveles de producción, productividad, comercialización y capitalización – habitualmente siguiendo los parámetros de la revolución verde – en aras de limitar el alcance de la migración estacional y de incrementar los ratios de consumo de la población beneficiaria continúan siendo objetivos prioritarios de una parte importante del paquete PRODEPINE. A continuación destaca la infraestructura social (desde agua para consumo humano y alcantarillado hasta abastecimiento de energía eléctrica, construcción de aulas y centros educativos o dispensarios médicos), que representa el 35 por ciento de los subproyectos y casi el 42 por ciento de las inversiones totales. En tercer lugar, y a mucha distancia, están las actuaciones de corte *alternativo* comprometidas con visiones del campesinado más vinculadas con la agroecología y los paradigmas de la sostenibilidad, aunque sólo supongan algo más del 10 por ciento del aporte de recursos (11,9 por ciento en volumen de subproyectos). Un dato, en fin, que viene a corroborar la aludida priorización de la senda desarrollista convencional. La capacitación para sistemas productivos y la defensa del patrimonio cultural, tan importantes desde el discurso del etnodesarrollo con que se vende PRODEPINE, ocupan un lugar marginal en el mundo de las implementaciones reales: una muestra más de lo alejadas que quedan determinadas proclamas del sentir cotidiano de unas entidades ejecutoras (en teoría) mejor conocedoras de las expectativas y las percepciones que las comunidades de base tienen de lo que puede esperarse del modelo proyectista. No en vano la clasificación comentada responde, en última instancia, a las prioridades expresadas mayoritariamente por las organizaciones de segundo grado en sus respectivos planes de desarrollo local.

¿Qué nuevos actores para qué nueva ruralidad?

En un voluminoso estudio multisectorial sobre Ecuador auspiciado por el Banco Mundial y significativamente titulado *An Economic and Social Agenda in the New Millennium* (2003), María Donoso-Clark define los tres objetivos estratégicos a perseguir en el ámbito del desarrollo rural: la cohesión económica y social de los espacios locales, el ajuste de la agricultura frente a los desafíos de la desregularización de los mercados – vía diversificación de las actividades económicas en las áreas campesinas, por ejemplo – y la protección del entorno. Es en la primera de esas líneas donde esta analista ubica a PRODEPINE, justificando su prórroga por lo que representa desde el punto de vista de la cooperación intercultural y de la consolidación de alianzas estratégicas capaces de promover el desarrollo local y facilitar su articulación regional (2003, 375 y 382). PRODEPINE – más específicamente, su componente de subproyectos – aparece así como la punta de lanza

exitosa de una *nueva* forma de abordar la ruralidad por medio del fortalecimiento de las estructuras organizativas – el capital social cristalizado en las OSG – resultantes de la también *nueva* coyuntura a la que se enfrentan las áreas rurales en la era de la globalización. En este apartado, a tenor de la información cuantitativa precedente, queremos sugerir una serie de líneas de reflexión sobre lo poco de cierto y lo mucho de retórico que hay en todo ello.

PRODEPINE y la fragmentación étnica del campesinado andino

La primera fase de PRODEPINE actuó en un contexto general en el que, por décadas, la etnicidad ha desempeñado un papel clave en la lucha de los sectores subalternos de la sociedad rural por el control de recursos fundamentales para su supervivencia y de espacios de representación pública. La reacción del aparato del desarrollo ante la emergencia de este fenómeno ha sido, como venimos argumentando, la de impulsar paradigmas de intervención que, con el capital social a la cabeza, forman parte de una estrategia aparentemente respetuosa con las demandas étnicas, sobre todo con las compatibles con la vía proyectista. Tras ella subyace, sin embargo, una nueva institucionalidad que incluye la descentralización de los servicios y los poderes – en consonancia con los gobiernos locales y las ONG – afín a la ideología anti-estatalista del neoliberalismo. Ahí es donde hay que encajar a PRODEPINE. Considérese si no el significado profundo de esta iniciativa, la más emblemática en desarrollo comunitario en el medio indígena ecuatoriano, diseñada en sus líneas esenciales desde el Banco Mundial, coordinada por destacados representantes de la intelectualidad indígena – razón por la que su control ha constituido un campo de competencia entre las grandes organizaciones étnicas nacionales y entre éstas y la Presidencia de la República a través del CODENPE –, desplegada sobre el terreno a través de la intermediación de las dirigencias de las OSG, pero financiada a cuenta de la deuda externa del Estado. Esto, que se vende como un ensayo novedoso en cooperación al desarrollo, constituye, en realidad, un sofisticado ejercicio de neocolonialismo, pues no merece otro calificativo el proceso por el que las políticas sociales del Sur se diseñan en el Norte, se ejecutan con el beneplácito de los representantes de los beneficiarios y dejan a los maltrechos estados del Sur el único papel de asumir los costos sin poder siquiera fiscalizar, pues se parte del apriorismo de que ellos, los estados, son distorsionadores e ineficientes por definición.

Hay que considerar por otra parte que la etnicidad hace tiempo que se ha convertido en un gran reclamo para el aparato del desarrollo. Durante el último cuarto de siglo, las inversiones realizadas por las agencias privadas en los Andes rurales han tendido a concentrarse más en función de la presencia de contingentes importantes de población indígena – capacitando de paso a unas elites locales cada vez más preparadas para moverse en ese escenario fraccionado y privatizado del desarrollo rural – que en base a preferencias directamente vinculadas con la extensión de la pobreza y la indigencia (Bretón 2001 y 2002). En este sentido, no debe sorprender que PRODEPINE haya coadyuvado a retroalimentar los procesos de redefinición de las identidades colectivas impulsados por las dirigencias indígenas con una dimensión político-reivindicativa. En la medida además en que desde el Banco Mundial se suponía – justamente por el binomio indianidad / capital social –

que el problema fundamental de las áreas rurales se circunscribía a las zonas predominantemente quichuas, se optó por el apoyo a un Proyecto como éste, que dejaba *de facto* a los pequeños productores mestizos en la Estacada.⁸

Atendiendo a estas consideraciones, parece apropiado concluir que estamos ante un modelo caracterizado por la fragmentación. Fragmentación de los enfoques y de las iniciativas (los centenares de intervenciones heterogéneas impulsadas), y fragmentación también de carácter étnico. Es como si el conjunto del campesinado andino no se enfrentara a una agenda común de desafíos derivados de la globalización, de la dolarización de la economía ecuatoriana y, específicamente, de su ubicación marginal y subordinada dentro de las estructuras productivas nacionales; como si no cupiera la posibilidad de articular una visión de conjunto sobre las medidas a tomar, visión que no debiera estar reñida con la inclusión de las obvias heterogeneidades y especificidades locales, micro-regionales y regionales. En consonancia con el marco en el que han operado – y operan – las ONG, el tándem PRODEPINE / PROLOCAL representa el paradigma sin paradigma, el triunfo del proyectismo sobre la política, de la praxis sobre la teoría y de lo concreto, puntual e inocuo sobre el cuestionamiento real de las causas de la pobreza y la exclusión.

Siguiendo los pasos de las ONG

El apoyo de PRODEPINE a las OSG ha tenido varios efectos, de entre los que sobresale la tendencia a ejecutar más subproyectos y a transferir más recursos justamente en aquellas parroquias y cantones en que, por decenios, las agencias de desarrollo invirtieron cuantiosos esfuerzos en articular un andamiaje organizativo susceptible de convertirse en su contraparte *natural*. Muchas ONG apostaron por esa línea de trabajo desde postulados progresistas vinculados a los planteamientos ideológicos de la izquierda: se trataba, por encima de todo, de afianzar organizaciones sólidas como instrumento de cambio social en el entorno indígena-campesino. Aunque en otras ocasiones la intención inicial fue más bien garantizar la docilidad de esas federaciones – como cuando, por ejemplo, a instancias de la entrada en escena de una institución con un proyecto en ciernes se generaban nuevas OSG como consecuencia de la fragmentación de otras más antiguas y más *politizadas*⁹ – el asunto es que el resultado global fue, al final, la existencia de más densidad organizativa allí donde más empeño y tenacidad había puesto el aparato del desarrollo. Dicho con otras palabras: es perfectamente coherente la mayor concentración de subproyectos PRODEPINE en las zonas con mayor presencia de ONG, pues el trabajo previo de éstas está en la base de la existencia de unas entidades federativas compatibles con su lógica operativa.

Esta aseveración adquiere mayor relevancia si atendemos al significado que PRODEPINE ha tenido como estímulo de cara a la revitalización de muchas OSG en crisis y al incremento de este tipo de instancias. No cuesta mucho imaginar, en un escenario de carencias y marginalidad como el característico de gran parte del mundo andino, lo que puede implicar el desembolso de sumas importantes de dinero y recursos – importantes en ese universo de carencias – para ser gestionadas por las dirigencias locales. Las mejoras constatadas en las evaluaciones del Proyecto en cuanto a la cantidad y calidad del capital social incitado son una respuesta esperable, perfectamente coherente con un *habitus* – el de los beneficiarios de las inicia-

tivas – modelado en el marco de su dilatada interacción con el mundo exterior. En el tiempo de las reformas agrarias, la constitución de comunas campesinas y cooperativas fue el mecanismo sugerido para facilitar el acceso a la tierra de exhuasipungueros y otros precaristas. Tras el reparto – limitado y asimétrico –, el acceso a los proyectos de desarrollo rural dependió de la existencia de federaciones de organizaciones de base, y una parte significativa de las instancias *campesinistas* impulsaron y apoyaron su proceso constitutivo.¹⁰ La inyección proyectista de PRODEPINE supone un estímulo más en la dirección apuntada. La peculiaridad acaso venga por del *modus operandi* que le caracteriza: abonado por más de veinte años de intervención en capital social *avant-la-lettre* capitaneada mayoritariamente por las ONG, PRODEPINE se nutre del humus de sus resultados – las OSG operativas en 1998 y la permeación en ellas de la lógica proyectista – y sirve de efecto demostración de cómo se puede seguir trabajando en ese rumbo prescindiendo ya de la intermediación de las ONG, estableciendo relaciones directas desde la infraestructura ejecutiva creada *ad hoc* por el Banco Mundial en el país hacia los pisos intermedios del entramado organizativo indígena, esta vez no tanto en calidad de meros receptores de los insumos como de ejecutores activos.

La naturaleza compleja y estratégica de las OSG

El hecho de que las OSG hayan solido articularse gracias a la promoción y apoyo de instituciones foráneas ligadas a programas de desarrollo, nos sitúa ante el problema de su naturaleza – heterogénea y poliédrica – y su grado de dependencia con respecto a quienes las han impulsado. Se ha constatado de qué modo la mayor densidad organizativa procede a veces de escisiones en las propias OSG vinculadas con la financiación de alguna(s) actuación(es) concretas y con las expectativas que ello abre para el alumbramiento de otra organización y, con ella, de la correspondiente dirigencia. Ha sido observado sobre el terreno también que, con frecuencia, las OSG compiten entre sí por mantener e incrementar sus bases, produciéndose desencuentros, desavenencias y conflictos.¹¹ Esta situación tiene mucho que ver con la constitución de liderazgos con un manejo clientelar de las regalías procedentes de los proyectos de desarrollo (Larrea 2002, 279). El propio Carroll reconoce este riesgo, derivado en parte del origen de los dirigentes, oriundos a menudo de las elites campesinas dotadas con más recursos y con mayor nivel educativo y acostumbrados a operar ‘en un círculo reducido de favoritismo de sus redes’ (Carroll 2002, 472).¹² Estas consideraciones nos llevan a interrogarnos sobre las implicaciones del desembarco de PRODEPINE en forma de recursos frescos puestos en manos de unas OSG que, en su praxis diaria, se alejan mucho de la imagen algo edulcorada transmitida por los defensores de su idoneidad como receptores del capital social depositado en las bases.

En cualquier caso, sería bueno no perder de vista que cada federación es un mundo y que su orientación puede ser interpretada en todo momento como la resultante del complejo haz de fuerzas sociales que operan en su interior. Ello no es óbice para no volver a insistir en la dimensión estratégica que tienen las OSG como formas subordinadas de interlocución – en tanto inducidas desde los requerimientos impuestos por el aparato del desarrollo –, conformadas a partir de los hábitos de los sujetos que las componen y de la interacción de esos sujetos y sus hábitos con

el mundo exterior. Una dimensión que ha determinado la consolidación de ese constructo en términos de la maximización de los espacios que ofrece un contexto general lejano a las comunidades, que éstas y la población rural en general no controlan, pero que distribuye recursos en base a la presencia de una red de organizaciones de base. De ahí que el acceso a los proyectos de la cooperación – a veces las únicas fuentes de esos recursos asequibles – haya dependido fundamentalmente de la existencia de OSG, asunto que nos sitúa de pleno ante el tema de los límites de la vía proyectista ahondada por PRODEPINE.

Los límites del proyectismo

Como muchas otras experiencias precedentes, los subproyectos PRODEPINE suelen adolecer de una visión desarrollista e idealizada de la actividad campesina. Así lo evidencia el peso de la inversión en rubros estrictamente agropecuarios, prescindiendo de la situación real de los pequeños productores rurales – la mayor parte de los ingresos de los cuales proceden de actividades externas a las de la propia explotación –, desconociendo la crisis irremediable por la que atraviesan las comunidades – manifestada en la pérdida de peso de los cabildos como instancias de representación y toma de decisiones (Martínez Valle 2002b) – y asumiendo una cierta imagen descontextualizada de un campesinado con tintes chayanovianos que ya no es (y quién sabe si fue algún día). Estas reflexiones adquieren matices extremos en el marco de la dolarización en que se desenvuelve la economía ecuatoriana. Los mercados regionales están invadidos por productos de todo tipo procedentes de Perú y Colombia, con unos costos de producción notablemente más bajos; lo mismo sucede en el ámbito de los asalariados rurales, pues un ejército de temporeros de los países limítrofes está ocupando y desplazando la fuerza de trabajo nacional dada su disponibilidad a cobrar en torno a un 30 por ciento menos. No es difícil conjeturar los efectos que esto acarrea para las explotaciones campesinas, presionadas a vender más barato, a comprar más caro y con serias dificultades incluso para emplear estacionalmente parte de su mano de obra en unos mercados laborales saturados por el efecto de la afluencia de inmigrantes foráneos en busca de retribuciones – a pesar de todo – más remunerativas al cambio que las de sus regiones de origen.

La unidireccionalidad proyectista no es el único elemento crítico de PRODEPINE. En la *Evaluación del componente de inversiones rurales* (2002) elaborado sobre el estudio de 50 casos (32 de ellos en la sierra),¹³ se señalan otras disfunciones, de entre las que destacan las que cuestionan las motivaciones que animan a invertir en tal o cual campo – si responden verdaderamente a necesidades locales prioritarias o no, hipótesis esta última que pone en entredicho la idoneidad de la metodología participativa aplicada – y las que aluden a la sostenibilidad de los subproyectos, pues resulta que poco es lo que se hace ‘para concientizar, capacitar y transmitir responsabilidades a los futuros dueños de la inversión’, que tendrán que velar por su conservación en un horizonte de ‘recursos técnicos y económicos limitados’ donde ‘la adquisición de servicios de asistencia técnica y capacitación es improbable’ (CESA / ECLOF 2002, 106). Esto significa, sin más, que el destino a medio plazo de una parte importante de la obra de PRODEPINE podría ser similar al de muchas iniciativas de ONG que, una vez finalizadas y tras la sali-

da de la agencia de turno, se deterioran por falta de mantenimiento; se abandonan ante la ausencia de interés por parte de los beneficiarios; o quedan en manos de aquellas familias con capacidad – técnica, financiera y de intermediación – para asumirlas en *petit comité*, circunstancia ésta frecuente en intervenciones productivas del tipo invernaderos, empresas de comercialización o adopción de determinados paquetes tecnológicos y que, como es lógico, redundan en un incremento de las distancias entre las élites campesinas y el resto.

Si la senda proyectista arrastra todas las limitaciones apuntadas, la viabilidad de PRODEPINE hay que buscarla en otra parte. Quizás sea entonces pertinente interrogarnos sobre sus efectos sociales y políticos a fin de comprender por qué el Banco Mundial insiste en publicitarlo como exitoso y prorrogable. En este punto adquiere gran relevancia el descubrimiento realizado por la fundación Heifer de que, con respecto a sus objetivos, las OSG que han trabajado con PRODEPINE han orientado sus demandas prioritariamente hacia la esfera del desarrollo, mientras que muy pocas veces reconocen el ámbito político-reivindicativo como estratégicamente importante (Larrea, Cobo, García y Hernández 2002, 15-16). La cuestión, ciertamente polémica, puede también ser interpretada desde el ángulo del efecto analgésico que PRODEPINE – en tanto correa de transmisión del proyectismo – ejerce sobre los diferentes niveles del movimiento indígena: sitúa el horizonte de los pisos intermedios del andamiaje organizativo – las OSG – en el número, el monto y la naturaleza de los subproyectos, mientras aleja la cuestión política con mayúsculas hacia las grandes plataformas nacionales; y eso en el mejor de los casos, pues estas últimas son celosas y están alertas en la lucha por el control de esa y otras instancias de inserción estatal: no en vano PRODEPINE, más allá de sus vínculos con el Banco Mundial, es una institución incrustada en el aparato del Estado. Por consiguiente, el mero hecho de centrar la negociación con ese mismo Estado en la magnitud y el alcance del Proyecto vacía el posible contenido político *anti* del movimiento indígena, lo encauza en una vía asumible por el modelo, lo institucionaliza en cierto sentido.

Reflexión final

En el mes de julio de 2003, cuando la alianza de Pachakutik – virtual brazo político del movimiento indígena – con el gobierno de Lucio Gutiérrez hacía aguas, un destacado dirigente de una OSG de la sierra central me comentó su reticencia a dejar el pequeño cargo que ocupaba – dependiente de un ministerio – en el caso de que se consumara la ruptura, tal como sucedió apenas un mes más tarde. Su razonamiento traducía una peculiar visión del Estado y sus instituciones, muy alejada para un observador externo de los dictados del *sentido común* ciudadano y de las reglas del juego en un sistema (formalmente) democrático: ‘los puestos [en la Administración] son nuestros, los hemos conquistado tras décadas de lucha’. Aquí parece oportuno abrir un paréntesis para incidir en uno de los mayores logros de la CONAIE y las otras organizaciones étnicas, el haber terminado con lo que Andrés Guerrero calificó como las ‘formas ventrílocuas de representación’, rediseñando el campo político e irrumpiendo en él con voz y planteamientos propios (Guerrero 2000, 49). El fin de la ventriloquia marca un punto de inflexión a partir del cual la participación de los indígenas en el Estado va a ser una constante. Desde esa lógica

– y aquí se cierra el paréntesis – la actitud del dirigente que menciono adquiere toda su coherencia: la suya sería una lucha larga, tenaz, en pos de cada vez mayores espacios institucionales. En esa línea, PRODEPINE constituye un paso más. Nunca el Estado destinó tantos recursos a los pueblos y nacionalidades *no* blanco-mestizos – argumentan intelectuales indígenas vinculados en algún momento a PRODEPINE –, así que su implementación y la participación en el mismo de diferentes instancias del movimiento constituye un triunfo, un espacio ganado, una esfera de control que fortalece y retroalimenta el conjunto de las demandas de las organizaciones indias.

Es importante retener esta visión de las cosas, pues es posible desde ella apostar – tras el rodaje experimental de la primera fase – por una gestión más transparente y celosa del destino futuro de las inversiones de la segunda etapa. Ello no es impedimento, sin embargo, para señalar la naturaleza subliminal de una iniciativa como ésta, coherente con el marco neoliberal en que se gesta, continuista con más de dos décadas de presencia masiva de agencias privadas de desarrollo en el medio rural y constitutiva de un nuevo indigenismo adaptado al signo de los tiempos de la globalización. Es bueno en este sentido no olvidar que la relación de las financieras – de todas ellas – con las contrapartes es siempre, por definición, una relación *de poder*: una relación entre quien aporta recursos y quien no tiene acceso a ellos (Sogge 2004), entre quien decide qué es prioritario (el capital social en este caso) y quien *traduce* ese discurso a su realidad y a sus necesidades, traducción que se procesa en base a unos hábitos modelados por la historia y que a su vez generan historia. Con esto queremos incidir sobre la conveniencia de distinguir entre las intenciones subyacentes del estamento financiero – encarnado por el Banco Mundial – y los logros que en el largo plazo puedan resultar de PRODEPINE. Justamente por no tener en consideración la compleja realidad que hay tras el caparazón de cada OSG es imprevisible lo que pueda resultar de todo esto, aunque sí es conjeturable a tenor de los acontecimientos y de la evolución del desarrollo rural en los últimos veinte años una mayor *clientización* y fractura del andamiaje organizativo indígena.

Se ha insistido en este ensayo en que la acepción que PRODEPINE aplica de la noción de capital social selecciona a las OSG como agentes prioritarios de intervención, prescindiendo de que éstas plataformas sean – como son – artefactos derivados del propio aparato del desarrollo, hijas de la interacción entre las agencias y el tejido social desigual y estratificado sobre el que operan. Eso sin contar con algunas consecuencias colaterales (¿o no tan colaterales?) de la irrupción del Proyecto en los Andes, tales como la fragmentación étnica del campesinado y el continuismo que supone con respecto al camino abierto por gran cantidad de ONG y otras financieras, continuismo evidenciado en el fortalecimiento de la vía proyectista y en la tendencia a concentrar sus inversiones en unas áreas en detrimento de otras. Desde esta perspectiva, PRODEPINE responde a la lógica de ‘más de lo mismo’, con un ropaje y un discurso sólo en apariencia novedoso.

En un notorio esfuerzo por establecer vías de comparación entre Bolivia y Ecuador, Andolina, Radcliffe y Laurie (2004) señalan cómo los paradigmas sobre el etnodesarrollo y el capital social han transformado las viejas teorías de la modernización, en la medida en que determinados caracteres de las *culturas ancestrales* (tales como los trabajos comunitarios o las tupidas redes sociales basadas en la reciprocidad) son contemplados como activos de cara al desarrollo, a diferencia de

los tiempos del desarrollismo (y del indigenismo) clásico. En la otra cara de la moneda, sin embargo, los nuevos discursos reproducen la teoría de la modernización (y la amplifican), entre otras razones, porque si bien es cierto que el capital social inmanente se considera requisito necesario para el desarrollo, también es verdad que para echar a andar ese proceso se indispensable la intervención exterior en forma de financiación, educación y transferencia tecnológica. Esto nos ubica ante el debate general sobre multiculturalismo y políticas de ajuste. Es útil en este sentido recordar de qué modo el proyecto cultural del neoliberalismo ha solido plasmarse en América Latina en el reconocimiento de algunos derechos culturales de las *minorías* étnicas – aquellos que no ponían en entredicho el *núcleo duro* del modelo de acumulación – y en el rechazo tajante (y sibilino) del resto. Optar por ocupar los espacios políticos abiertos (en buena parte) por la lucha de las organizaciones indígenas es, para algunos autores, una opción inteligente. Eso supone, no obstante, articularse al bloque dominante, a no ser que esa decisión forme parte de una estrategia bien planificada de resistencia y/o de búsqueda de una verdadera alternativa política (Hale 2003, 522). En el caso ecuatoriano podemos concluir, por el momento, que la identificación entre capital social y densidad organizativa emerge como la coartada para profundizar en un patrón de relaciones que busca direccionar el rumbo del movimiento indígena dentro de unos cauces que no cuestionen el meollo del modelo hegemónico: un barniz postmoderno con que ocultar una orientación política tan antigua como la propia noción contemporánea de desarrollo.

* * *

Víctor Bretón Solo de Zaldívar es Profesor Titular de Antropología Social de la Universidad de Lleida (España), miembro del Grupo Interdisciplinar de Estudios de Desarrollo y Multiculturalidad (GIEDEM) de esa Universidad, e Investigador Asociado a FLACSO / sede Ecuador. Especialista en desarrollo rural y economías campesinas, ha publicado diversos trabajos, de entre los que destacan *Capitalismo, reforma agraria y organización comunal en los Andes* (1997); *Tierra, Estado y Capitalismo* (2000); y *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos* (2001). Recientemente ha compilado, en colaboración con Francisco García, el volumen colectivo *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina: Ecuador en crisis* (2003). <Breton@hahs.UdL.es>

Notas

1. Nacido en el entorno del Banco Mundial, PRODEPINE abarca al conjunto de la República del Ecuador. Sin embargo, con objeto de limitar el alcance de la investigación, el estudio se ha circunscrito al área andina.
2. Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden señalar algunas grandes posiciones teóricas en torno al alcance y los límites del capital social. Por una parte están las definiciones estructurales tributarias de las aportaciones de Bourdieu (2001 [1980]) y Coleman (1990), quienes lo entienden como un conjunto de recursos disponibles por los individuos en tanto miembros de una red social que, como tal, está estructurada, tiene historia y continuidad. En el otro extremo están las concepciones de carácter culturalista, en las que el capital social es concebido como un fenómeno subjetivo compuesto por las actitudes y los valores que determinan cómo se relacionan unos individuos con otros. Llevados hasta el extremo, estos últimos planteamientos conducen a una suerte de determinismo superestructural en virtud del cual 'no todas las normas y valores, y por tanto todas las culturas, son creadas iguales en lo atinente a su capacidad de fomentar el crecimiento económico', pues no todas tendrían 'la misma reserva (*stock*) de capital social' (Fukuyama 2003, 37). Entre ambos tipos encontramos, por supuesto, una amplia gama de posicionamientos intermedios.
3. En 1995 empezó a madurar esta propuesta (Uquillas y Van Nieuwkoop 2003, 2), no estando vinculada en sus orígenes a la discusión sobre el capital social. El hecho de que terminase ensamblandose plenamente en ella, prueba la importancia de la dimensión política que el Banco Mundial ha ido otorgando a esa línea de reflexión.
4. Sus fondos ascendían en 1999 a 25 millones de dólares aportados por el Banco Mundial, 15 por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) –estas dos partidas a cuenta de la deuda externa ecuatoriana–, más una cuota de 10 millones desembolsada por el Estado y, en mucha menor cuantía, por las propias organizaciones indígenas. La satisfacción por los resultados obtenidos explica la prórroga del Proyecto en una segunda etapa de otros cuatro años –operativa a partir de junio de 2004– costeada de nuevo por la vía del endeudamiento.
5. El CODENPE es un organismo del Estado, adscrito a la Presidencia de la República, creado en diciembre de 1998. Su función es coordinar las políticas orientadas al sector indígena, incluso las financiadas y/o planificadas desde el exterior. De ahí que PRODEPINE forme parte orgánica del CODENPE.
6. Otro aspecto polémico es el del volumen total de población indígena. Los datos manejados por PRODEPINE no coinciden con otras cuantificaciones más exhaustivas. La *Estimación de la población indígena y negra* realizada a instancias del CODENPE en base a las proyecciones de 1995, arroja un cómputo de 630.840 individuos, mientras que el *Censo de población y vivienda* de 2001 eleva éste a 680.586 (SIISE 2003). En su informe final, sin embargo, PRODEPINE da como válida la cantidad de 1.439.078 personas sin ningún tipo de explicación al respecto. Dada la orientación del Proyecto, cabe suponer que esa población sea mayoritariamente rural, con lo cual sorprende, se mire como se mire, la desproporción de esta estimación. En la tabla 1 descubrimos además otras incorrecciones preocupantes, tales como que el 125,58% de las organizaciones de base de los achuar y el 110% de las de los awa se han beneficiado de PRODEPINE (108 organizaciones de un total de 86 en el caso de los achuar y 22 de 20 en el de los awa); así como que más awa y más shiwiar de los contabilizados –los presuntamente existentes– se han visto agraciados por los subproyectos. Errores de tal magnitud nos hacen mantener una actitud prudente ante la lectura de unos datos tan sensibles desde la óptica de la investigación.
7. Para las precisiones metodológicas relativas a esta tabla y al anexo estadístico, pueden consultarse las especificaciones contenidas en SIISE (2003) referentes al Censo de 2001 y a las estimaciones de PRODEPINE sobre población rural e indígena. Debo aclarar que, al constatarse pocas diferencias entre ambas fuentes en lo que respecta a este último ítem (ver anexo), he tomado la primera como indicador en la tabla 3, pues facilita su cotejo con la información (también censal) sobre el alcance de la pobreza (medida como necesidades básicas insatisfechas). Los datos sobre ONG proceden de la Fundación Alternativa (1999), de cuyo directorio seleccioné una muestra representativa de 170 agencias especializadas en desarrollo rural. Los datos aluden al monto de proyectos concretos (405 en total) impulsados por esas ONG. En el caso de los tantos por cien, éstos están calculados en relación al total de la sierra.

8. Esta situación ha sido parcialmente contrarrestada por el arranque de PROLOCAL (*Proyecto de Desarrollo Local Sostenido*), operativo desde 2001 y dirigido a la población rural mestiza excluida de PRODEPINE. La propia Donoso-Clark considera a PROLOCAL –también gestado a instancias del Banco Mundial– como el *alter ego* de PRODEPINE, puesto que persigue extender sus mismos objetivos a las comunidades no-indígenas y no-afroecuatorianas (Donoso-Clark 2003, 382).
9. Como sucedió con la *Unión de Organizaciones de Campesinos Indígenas de Guamoto* (UOCIG), una de las muchas OSG que operan en ese cantón chimboracense y que fue creada en 1989 a la sombra de un proyecto de desarrollo rural integral (DRI) gubernamental. Éste funcionaba en Guamoto desde 1980, pero sus responsables no fueron capaces de establecer vínculos con *Jatum Ayllu* – la OSG histórica de la zona, nacida en 1974 con el apoyo de la Diócesis de Riobamba – a causa de discrepancias sobre el grado de control que esa organización debería de tener sobre el programa (Korovkin 1997, 40). En 1989, por influencia de los técnicos del DRI, se propuso la creación de la UOCIG, y fue ésta y no *Jatum Ayllu* quien se constituyó como contraparte del Estado. La nueva organización ha mostrado un talante más desarrollista y centrado en la gestión de proyectos; a diferencia de *Jatum Ayllu*, cuyas actividades han pivotado del lado político e identitario (Bebbington y Perreault 1999, 410-411). Ver también los excelentes trabajos de Víctor Hugo Torres (1999 y 2002).
10. Ahí quedan experiencias remarcables como la de la *Unión de Organizaciones Populares de Ayora Cayambe* (UNOPAC): Fernando Larrea (2002) ha relatado con detalle el proceso de consolidación de esa organización de la mano de los agentes externos y su paulatina conversión en una institución con gran capacidad de interlocución y de gestión de proyectos y empresas sociales. Similar en sus orígenes es la *Tucuy Cañar Aillucunapac Tantanacuy* (TUCAYTA), una de las OSG más notorias de la provincia de Cañar. Su historia, minuciosamente estudiada por Martínez Valle (2002, 2003), está íntimamente relacionada con la implementación de un proyecto de riego (Patococha) que, iniciado en un primer momento desde el Estado, fue asumido durante muchos años por una ONG y finalmente transferido a la TUCAYTA.
11. Un caso que responde a esta dinámica es el de la *Corporación de Comunidades Indígenas Maquipurashun* (CORCIMA), creada a resultas del *Proyecto Maquipurashun*, impulsado por Visión Mundial desde 1996 en la parroquia de Quichinche (Otavalo) tomando en principio como contraparte a la *Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche* (UCINQUI), la OSG local. La evolución del Proyecto, así como las continuas fricciones de éste con la dirigencia de la UCINQUI (*Maquipurashun* vulneraba el estilo verticalista y autocrático de ésta) ha llevado al nacimiento de la nueva OSG, que competirá por recursos, proyectos y organizaciones de base con la hasta ahora única expresión federativa en esa parroquia (Notas de campo del autor).
12. Así sucede en la *Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi* (UNOCANC) de la parroquia de Toacazo (cantón Latacunga), una OSG con gran capacidad de movilización y de la que han salido notorios dirigentes del movimiento indígena nacional (la figura más conocida es, sin duda, la de Leonidas Iza, ex-presidente de la CONAIE). En la investigación que estoy realizando sobre esa federación he podido observar cómo, en efecto, su control siempre ha estado directa o indirectamente en manos de las elites campesinas locales: las que salieron más beneficiadas con la reforma agraria y que, a lo largo de tres décadas de intervención intensiva de ONG en la zona, más réditos sacaron de la cooperación al desarrollo (en términos de capacitación, transferencia de tecnología y apoyo político). Las estructuras de poder de la OSG responden, pues, a procesos de diferenciación interna que arrancan del tiempo de la hacienda y que han sido acelerados y ensanchados por efecto de los agentes externos. Dadas las circunstancias, la forma de relacionarse la dirigencia con las organizaciones de base y con los diferentes sectores que las conforman obedece más a una lógica clientelar que a otra cosa.
13. Consultoría independiente realizada por CESA (*Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas*) y ECLOF (*Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos*).

Referencias bibliográficas

- Andolina, R.; Radcliffe, S.; Laurie, N. (2004) 'Development and Culture: Transnational Identity Making in Bolivia'. Article prepared for consideration by *Political Geography*.
- Banco Mundial (2003) *Informe y recomendación del Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Corporación Financiera Internacional para los directores ejecutivos sobre una estrategia de asistencia al país para la República del Ecuador*. Informe n° 25817 EC, Unidad de Gestión de País para Bolivia-Ecuador-Perú-Venezuela, Región de América Latina y el Caribe, Washington: Banco Mundial.
- Bebbington, A. (2003) 'Capital social e intensificación de las estrategias de vida: organizaciones sociales e islas de sostenibilidad en los Andes rurales', en R. Atria, M. Siles, I. Arriagada, L.J. Robinson, S. Whiteford (comp.) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 491-506.
- Bebbington, A.; Carroll, Th. (2000) 'Induced social capital and federations of the rural poor'. Social Capital Initiative Working Paper n° 19, Washington: Banco Mundial.
- Bebbington, A.; Perreault, Th. (1999) 'Social capital, development, and access to resources in Highland Ecuador', *Economic Geography*, vol. 79, n° 4, pp. 395-418.
- Bebbington, A.; Torres, V.H. (2001) 'Vidas rurales y acceso a recursos naturales: el caso de Guamote', en *Capital social en los Andes*. Quito: COMUNIDEC / Abya-Yala, pp. 69-104.
- Bebbington, A.; Guggenheim, S.; Olson, E.; Woolcock, M. (2004) 'Exploring Social Capital Debates at the World Bank', *Journal of Development Studies*, vol. 40, n° 5, pp. 33-64.
- Bourdieu, P. (2001) 'El capital social. Apuntes provisionales', *Zona Abierta*, n° 94-95, pp. 83-87.
- Bretón, V. (2002) 'Cooperación al desarrollo, capital social y neo-indigenismo en los Andes ecuatorianos', *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n° 73, pp. 43-63.
- (2001) *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo*. Quito: FLACSO / Universitat de Lleida.
- Carroll, Th. (2003) 'Tales of Collective Empowerment in the Andes'. Ponencia presentada en *The 2003 Meeting of Latin American Studies Association*, Dallas.
- (comp.) (2002) *Construyendo capacidades colectivas. Fortalecimiento organizativo de las federaciones indígenas en la Sierra ecuatoriana*. Quito: Rispergraf.
- CESA / ECLOF (2002) *Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE): Evaluación del componente de inversiones rurales. Informe preliminar de evaluación*. Quito: Mimeo.
- Coleman, J. (1990) *Foundations of Social Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Coronel, R. (coord.) (1998) *Censo Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras e índice de fortalecimiento institucional*. Quito: PRODEPINE.
- Donoso-Clark, M. (2003) 'Rural Development', en V. Fretes-Cibils, M. Giugale, J.R. Lopez-Calix, (eds) *Ecuador: An Economic and Social Agenda in the New Millennium*. Washington: World Bank, pp. 369-387.
- Fine, B. (2002) 'It Ain't Social, It Ain't Capital and It Ain't Africa', *Studia Africana*, n° 13, pp. 18-33.
- (2001b) *Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium*. Londres: Routledge.
- (2001) 'The social capital of the World Bank', en B. Fine, C. Lapavitsas, J. Pincus (eds) *Development Policy in the Twenty-first Century*. Londres: Routledge, pp. 136-154.
- Fukuyama (2003) 'Capital social y desarrollo: la agenda venidera', en A. Bebbington (2003), pp. 33-48.
- Fundación Alternativa (1999) *Sistema de Información de Organizaciones Sociales del Ecuador*, correspondientes a 1996-1999. Quito: soporte informático.
- Grootaert, Ch.; Van Bastelaer, Th. (2001) 'Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative'. Social Capital Initiative Working Paper n° 19, Washington: Banco Mundial.
- Guerrero, A. (2000) 'El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transcritura', en A. Guerrero (ed.) *Etnicidades*. Quito: FLACSO, pp. 9-60.
- Hale, Ch.R. (2003) 'Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala', *Journal of Latin American Studies*, vol. 34, pp. 485-524.
- Korovkin, T. (1997) 'Indigenous Peasant Struggles and the Capitalist Modernization of Agriculture. Chimborazo, 1964-1991', *Latin American Perspectives*, Issue 94, Vol. 24, n° 3, pp. 25-49.
- Larrea, F. (2002) 'La construcción de capital social y el desarrollo local: el caso de la Unión de Organizaciones Populares de Ayora Cayambe (UNOPAC)', en Carroll, Th. (ed.) (2002), pp. 193-271.
- Larrea, F.; Cobo, A.; Garcia, M.; Hernandez, K. (2002) *Las capacidades de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas de segundo y tercer grado: resultados del censo de entidades ejecutoras de*

- PRODEPINE e índice de fortalecimiento institucional*. Informe de consultoría para PRODEPINE, Quito: Fundación Heifer Ecuador.
- Larreameindy, P.; Uquillas, J. (2001) 'Desarrollo con identidad: Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-ecuatorianos', *La Ventana Boletín*, Informe de la Unidad de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Washington: Banco Mundial, vol. 1, pp. 3-4.
- Martínez Valle, L. (2003b) 'Las Organizaciones de Segundo Grado (OSG) como nuevas formas de organización de la población rural'. Ponencia presentada en la *Asamblea General de CLACSO, Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural*. La Habana.
- (2003) 'Capital social y desarrollo rural', *Íconos*, n° 16, pp. 73-83.
- (2002b) *Economía política de las comunidades indígenas*. Quito: Abya-Yala.
- (2002) 'El capital social en la Tucayta (*Tucuy Cañar Aillucunapac Tantanacuy*)', en Th. Carroll (ed.) (2002), pp. 129-186.
- Petras, J.; Veltmeyer, H. (2001) 'Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited', *The Journal of Peasant Studies*, vol. 28, n° 2, pp. 83-118.
- PRODEPINE (2002) *Informe de cierre del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador*. Quito: PRODEPINE.
- SIISE (2003) *Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador* (versión 3.5). Quito: Secretaría Técnica del Frente Social, República del Ecuador.
- Sogge, D. (2004) *Dar y tomar. ¿Qué sucede con la ayuda internacional?* Barcelona: Icaria.
- Torres D.; V.H. (2002) 'Capital social y colaboración pública en el Ecuador: el caso de la organización *Jatum Ayllu* Cabildo de Guamote', en Th. Carroll (ed.) (2002), pp. 61-128.
- (1999) 'Guamote: el proceso indígena de gobierno municipal participativo', en *Ciudadanías emergentes. Experiencias democráticas de desarrollo local*. Quito: Abya-Yala, pp. 87-112.
- Uquillas, J.; Van Nieukoop (2003) 'Social Capital as a Factor in Indigenous Peoples Development in Ecuador', *Sustainable Development Working Paper* n° 15, Washington: World Bank.
- Woolcock, M. (1998) 'Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework', *Theory and Society*, vol. 27, n° 2, pp. 151-208.

Anexo estadístico

Población rural, iniciativas de ONG y distribución de recursos PRODEPINE en los cantones serranos agraciados por la primera fase del Proyecto

Provincia	Cantones	Población rural CENSO 2001			Población rural PRODEPINE 1998		ONG 1999		Ejecución PRODEPINE 1998-2002		
		Población total	Total pobres	% indígenas	Población total	% indígenas	núm. proy.s	%	núm. org.	núm. proy.	Inversión total
Azuay	Cuenca	140.258	106.186	5,3	174.384	8,0	16	4,0	2	5	81.316
	Gualaquío	27.905	25.379	10,3	30.060	6,2	11	2,7	1	3	69.656
Bolívar	Chillanes	16.349	14.963	5,8	14.638	26,4	3	0,7	1	2	14.704
	Chimbo	11.098	9.594	9,9	12.217	-	2	0,5	1	1	13.892
	Echeandía	6.375	5.851	7,1	5.851	-	2	0,5	2	3	26.901
	Guaranda	60.901	57.083	55,7	53.630	55,9	20	4,9	10	25	457.829
	San Miguel	20.766	17.613	6,5	22.227	0,6	2	0,5	1	1	15.292
Cañar	Azogues	37.044	28.935	7,6	41.756	-	8	2,0	1	3	64.432
	Biblián	16.356	13.006	6,4	16.278	-	2	0,5	2	5	59.366
	Cañar	47.071	43.980	44,7	45.895	51,8	13	3,2	5	20	272.404
	Suscal	3.585	3.559	83,8	1.899	59,0	-	-	2	5	61.564
Carchi	Bolívar	11.322	9.525	1,1	13.754	-	1	0,2	1	1	20.083
	Mira	10.023	8.286	3,0	11.550	-	1	0,2	2	6	133.791
Chimborazo	Tulcán	29.816	23.471	7,8	31.281	-	9	2,2	1	2	38.102
	Alausí	37.260	34.811	61,4	40.477	59,1	14	3,5	4	11	198.532
	Colta	42.406	40.725	89,4	42.918	79,5	18	4,4	13	41	731.573
	Guamote	33.298	33.018	96,7	26.022	95,3	15	3,7	5	11	245.528
	Guano	31.016	28.957	16,6	30.213	26,6	13	3,2	3	8	129.544
Cotopaxi	Riobamba	68.508	60.227	60,3	82.418	65,3	34	8,4	12	49	880.669
	Latacunga	92.290	78.530	12,6	68.555	9,3	11	2,7	4	11	210.145
Sigchos	Pujilí	53.913	50.925	61,6	41.983	51,6	3	0,7	4	9	181.293
	Salcedo	41.451	37.779	38,7	36.388	51,5	4	1,0	4	13	249.246
	Saquisilí	15.581	14.970	59,7	9.635	52,4	3	0,7	2	9	215.532
	Sigchos	19.450	18.774	43,1	15.056	40,9	-	-	2	3	84.081

Continúa en la siguiente página.

Provincia	Cantones	Población rural CENSO 2001			Población rural PROPEPINE 1998			ONG 1999		Ejecución PROPEPINE 1998-2002		
		Población total	Total pobres	% indígenas	Población total	% indígenas	%	núm. proy.s	%	núm. org.	núm. prov.	Inversión total
Imbabura	Antonio Ante	18.278	13.220	31,9	14.572	59,8	1	0,2	1	2	29.501	
	Cotacachi	29.726	26.512	43,0	27.653	36,9	8	2,0	1	10	237.720	
	Ibarra	44.721	34.329	25,2	47.857	26,8	7	1,7	4	10	245.672	
	Olavalo	59.223	50.221	72,3	41.896	69,6	17	4,2	7	19	572.922	
	Pimampiro	8.297	7.818	20,2	10.137	8,6	1	0,2	1	3	52.698	
Loja	Saraguro	24.905	22.942	26,9	23.548	29,2	5	1,2	2	9	113.911	
	Cayambe	39.327	34.760	44,8	33.212	69,4	15	3,7	4	24	386.225	
Pichincha	Pedro Moncayo	19.487	16.335	23,1	13.126	40,1	5	1,2	2	10	309.491	
	Quito	440.475	224.754	4,5	373.349	7,5	—	—	1	1	64.500	
	Santo Domingo	87.191	76.427	2,8	93.127	1,1	—	—	1	5	120.931	
	Ambato	133.187	113.052	31,6	126.103	35,0	10	2,5	9	25	482.285	
Tungurahua	Patate	9.976	8.921	10,5	7.938	12,2	—	—	1	1	18.296	
	Quero	15.949	14.792	1,7	13.094	45,7	—	—	1	1	15.268	
	Pelileo	39.937	33.785	20,5	37.459	7,8	3	0,7	1	2	43.292	
	Pillaro	28.626	25.062	25,5	29.205	32,9	2	0,5	1	4	51.349	
	Tisaleo	9.487	8.728	8,6	7.063	—	—	—	1	6	113.335	

Fuente: Ver tabla 3.